



COLOMBIA: DESAFÍOS PARA UN NUEVO GOBIERNO

Érika M.^a Rodríguez Pinzón*

28 de junio de 2022

Resumen

El 19 de junio Colombia abrió la puerta a un gobierno de izquierda. Gustavo Petro, líder del partido Pacto Histórico, y un político con más de 30 años de experiencia, marcado por su pasado guerrillero, estará al frente del país por cuatro años. En un país con un gran miedo a la izquierda, su elección desata temores en una parte del electorado y de los empresarios, mientras suscita una enorme esperanza para muchos que, por primera vez, se sienten representados, no solo por Petro, sino muy especialmente por su vicepresidenta, Francia Márquez. Este artículo analiza el miedo a la izquierda y las claves de la segunda vuelta electoral. También se centra en las tres áreas en las que el nuevo presidente afronta grandes desafíos: el descontento social; la desigualdad y el crecimiento económico; y la seguridad y la paz. En las conclusiones se reseñan algunos aspectos positivos del proceso electoral, entre ellos, el papel determinante del Acuerdo de Paz en la ampliación y reconfiguración de la democracia. Finalmente, se plantean los dilemas de la acción del presidente y la responsabilidad compartida con otros sectores en la búsqueda de los muy necesarios pactos nacionales para la transformación del país.

Introducción

A tan solo un par de semanas de las elecciones presidenciales, durante cinco días, 178 municipios de Colombia, entre ellos dos capitales de departamento, Córdoba y Montería, veían sus calles desiertas. El paro armado decretado por el Clan del Golfo o, como ellos mismos se denominan, las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC), confinó a los habitantes en sus casas en protesta por la extradición de su líder Otoniel (Dairo Antonio Úsuga). El comercio y las escuelas cerraron. Cualquier vehículo que circulara

corría el riesgo de ser incinerado, se suspendió un partido de la liga nacional, los supermercados se desabastecieron y los enfermos no pudieron acercarse a los hospitales a recibir tratamiento.

La presencia de las AUG se grabó con pintadas en calles y en vehículos, y hasta en los perros que deambulaban por las calles. A nadie, se le escapa la capacidad de control de este grupo paramilitar, de unos 1.000 hombres, calificado por el gobierno de Iván Duque como la mayor banda criminal del país (*El País*, 2022). A nadie, excepto a los invitados de la lujosa boda que tuvo lugar en pleno centro de Montería (Palomino, 2022), una de las ciudades en paro. Este hecho no es una

* Doctora en Relaciones Internacionales, es investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid (ICEI-UCM) y profesora de Ciencias Políticas en la UCM.



anécdota: mientras se interrumpía el paso de los camiones de alimentos y de las caravanas de vehículos, incluso de aquellas con escolta militar, los invitados al enlace pudieron llegar y departir en una zona vedada para cualquiera que no cuente con el aval del oscuro poder que controla la violencia en esta zona del país.

Mientras las AUG demostraban su poder, el presidente Duque asistió puntual a la ceremonia de investidura del presidente de Costa Rica. Esta ausencia contrastaba con su activa presencia, hace poco más de un año (abril de 2022), cuando miles de colombianos se lanzaron a las calles a protestar. Entonces, el presidente, rodeado de la cúpula militar, dirigió en persona el operativo de mantenimiento del orden.

La imagen esbozada en estos primeros párrafos da buena idea de la realidad del país antes de las elecciones de 2022: un Estado que opera de forma fragmentada en el territorio; la enorme capacidad de coerción de los grupos armados; la frágil y mediocre implementación del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); la indefensión de los ciudadanos ante las amenazas a la seguridad humana; los persistentes vínculos de algunas élites con los actores violentos; y un gobierno al que se le agotaron las propuestas en medio de un escenario de incertidumbre y crecientes desafíos socioeconómicos a escala global.

Entre el uribismo y el “miedo a la izquierda”

En los últimos años las elecciones en Colombia han reflejado la disputa entre el candidato designado por el expresidente Álvaro Uribe y un opositor, Juan Manuel

Santos. Este, de hecho, fue asimismo seleccionado como heredero de Uribe, pero se convirtió en opositor y, ante su segundo mandato, se enfrentó a Jorge Iván Zuluaga, candidato indicado por Uribe. En 2018 Iván Duque, también designado por Uribe, vivió un proceso electoral más atípico, pues el ascenso de Gustavo Petro marcó un cambio radical al generar una oportunidad real de gobierno a la izquierda.

Las elecciones de 2018 fueron las primeras en las que la izquierda tuvo opciones reales de llegar a la presidencia, una situación histórica dado que, desde la década de 1930, nunca ha habido alternancia entre izquierda y derecha. En 2021, esta posibilidad se consolidó favorecida por el malestar social manifestado en las calles, al igual que en 2019, y por las debilidades del gobierno de Duque, que agotaron las opciones del uribismo. Así, de ser el mandatario elegido con mayor cantidad de votos (10.398.689), pasó a contar con la opinión desfavorable del 73% de la ciudadanía (Invamer, 2022).

Quizá uno de los elementos más relevantes de la política colombiana ha sido justamente el del “miedo a la izquierda”, resultado de la conjunción de varios factores. En primer lugar, la exclusión de la izquierda como opción electoral fue producto del Pacto de Sitges, de 1957, entre los partidos tradicionales que acordaron mantener un sistema de alternancia en el poder entre 1958 y 1974. Esta exclusión de la izquierda redundó en el desdibujamiento ideológico del partido Liberal y en la creación de un argumento para la vía guerrillera. Además, se produjo enmarcado en la Guerra Fría y bajo la doctrina de



la lucha contra el “enemigo interno”, convirtiéndose en una dinámica de confrontación no solo violenta, sino militarizada. En segundo lugar, dicho “miedo” deriva del peso de las guerrillas comunistas en la historia reciente del país que, lejos de encarnar las demandas populares, se convirtieron en un azote contra los civiles. En su lógica de lucha militarista debilitaron la movilización social, la cooptaron o coaccionaron y redujeron sus opciones políticas.

En tercer lugar, cabe referirse al “castrochavismo” como eficaz etiqueta del “miedo a la izquierda”, cuando la deriva antidemocrática y la precaria situación socioeconómica del país andino dejó de ser un asunto de política exterior para convertirse en política interna en muchos países, Colombia y España entre ellos. Y ello, no por una preocupación genuina por el futuro de la ciudadanía venezolana, sino por la utilización política de este caso por parte de las derechas como ejemplo aleccionador de los peligros de los gobiernos de izquierda. Un discurso que no tiene un anclaje fundamentado, pero que apela a promover sentimientos de miedo y rechazo. Las noticias falsas y el empleo de las redes han permitido utilizar esta narrativa de forma masiva y por un largo tiempo. En el caso de Colombia, la histórica falta de alternancia entre opciones ideológicas ha alimentado dicho “miedo” y ha dado pie a temores infundados por la derecha, como la idea de que la izquierda no va a abandonar el poder; esto es: el miedo al cambio como cultura política. Un miedo que, de por sí, encierra importantes riesgos, tal como señala Gutiérrez Sanín:

Crear pánico moral alrededor del simple hecho de la alternación en el poder genera una profecía autocumplida de exclusiones mutuas y desestabilización. Un gobierno de la oposición necesita de la “disposición pragmática”, pero también de los cuadros y los conocimientos, de la gente que ha estado “dentro del sistema”, también para sus reformas (Gutiérrez Sanín, 2022).

En cuarto lugar, hay que mencionar la imagen particular del candidato en cuestión. En un sistema político caracterizado por el personalismo, donde un candidato convierte su inicial en nombre de partido (por ejemplo, partido de la U), el carisma y la popularidad determinan en gran parte la movilización política. El caso de Gustavo Petro mueve pasiones encontradas. Su carácter personal le granjeó dificultades en su paso por la Alcaldía de Bogotá y puede estar detrás de las dificultades que ha experimentado para aglutinar al progresismo tras su propuesta. Pero a su vez, en las elecciones presidenciales de 2022, él y su vicepresidenta han conseguido casi tres millones de votos en zonas en las que la participación electoral suele ser muy débil, y donde generan esperanza.

Sin embargo, y en último lugar, la expresión más terrible del “miedo a la izquierda” se desprende de la lucha antisubversiva y antinarcóticos. Bajo la excusa de estos conflictos, se ejerció una violencia furibunda —en la que convergieron la aquiescencia o el respaldo activo de los poderes políticos y económicos— que diezmó e incluso eliminó físicamente a figuras de izquierda, o que se le parecieran. En esta guerra sucia se enmarcó, en los años ochenta, el asesinato de miles de seguidores de la Unión Patriótica o, ya en la campaña presidencial de 1990, el ase-



sinato de tres candidatos presidenciales, entre ellos el de Carlos Pizarro, compañero de Gustavo Petro en el Movimiento 19 de Abril (M19). En este contexto, no se puede olvidar el papel activo del narcotráfico en la financiación del paramilitarismo, de la parapolítica e incluso de las elecciones presidenciales.

El “miedo a la izquierda” ha sido asimismo muy utilizado en la campaña electoral de 2022, donde la guerra sucia y las noticias falsas han dominado el escenario. En la segunda vuelta ni siquiera se realizaron debates, por la negativa de Rodolfo Hernández a participar, y a pesar de una sentencia judicial que lo obligaba. Esto llevó a un cierre de campaña ausente de propuestas políticas, dominada por las filtraciones escandalosas de algunos medios de comunicación.

Entre la abstención y el populismo

Colombia es un país que habitualmente registra altos niveles de abstención electoral, casi siempre superiores al 50%. Estudios como el de Vasset y Guavita (2019) señalan que las elecciones locales suelen ser más movilizadoras, mientras que, en el plano nacional, las elecciones parlamentarias registran una participación más estable, y las presidenciales dependen de la coyuntura y de qué tan atractivos sean los candidatos. Asimismo, en elecciones donde el resultado parece muy ajustado, la participación tiende a aumentar, tal como ha ocurrido en 2022: la participación en la segunda vuelta alcanzó el 58%, una cifra histórica que proviene del aumento del voto en el Atlántico, el Pacífico y las grandes ciudades (Galindo, 2022).

En general las de 2022 han sido unas elecciones atípicas. El resultado de la primera vuelta fue una sorpresa por el paso a segunda vuelta de Rodolfo Hernández, cuando dos semanas antes las encuestas preveían el segundo puesto para Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha tradicional que había recibido el apoyo del uribismo (partido Centro Democrático) y de los partidos Liberal y Conservador.

Hernández, un empresario multimillonario que fue alcalde de Bucaramanga, una ciudad mediana del occidente de Colombia, presentaba un clásico discurso populista bajo la dicotomía pueblo/élite, pero no necesariamente ultraderechista. Sus salidas de tono machistas o xenófobas no centraron su discurso, aunque parece claro que fueron castigadas en las urnas. El eje de su campaña era la “anticorrupción”, pero no ofreció un programa de medidas concretas para atajarla. En sus alegatos contra la corrupción, recogía toda suerte de gastos que consideraba despilfarros —como el empleado en las embajadas— e incluía diatribas contra los empleados públicos. Sin embargo, en otros temas destacaba por su pragmatismo, asumiendo las dimensiones socialmente progresistas de Colombia (cambio en la política de drogas, renta mínima vital, matrimonio homosexual y adopción, entre otros) lo que le permitió centrarse en exacerbar la ruptura vertical. A pesar de ello, ante la segunda vuelta, recibió la adhesión de la mayor parte de la clase política tradicional. No obstante, al negarse a asistir a debates, no profundizaba su mensaje y tampoco podía ser contestado. Una campaña exclusivamente centrada en las redes sociales, como la que protagoni-



zó Hernández, es efectista, pero no permite contrastar propuestas ni aclarar contradicciones o acusaciones, como la de su imputación en un proceso por corrupción (con todo, pese a que haya perdido, no cabe minusvalorar la potencia y éxito de sus propuestas a través de WhatsApp y Tik Tok).

En suma, ante las elecciones de 2022 cabe subrayar varias dimensiones. La primera es la aparición y éxito de un populismo no habitual en el país. Hasta ahora en Colombia no habían aparecido rasgos políticos que sí han triunfado en otros países de la región. Nunca había surgido un empresario exitoso (como Enrique Peña Nieto, Rafael Piñera o Guillermo Lasso), que entra en política con soluciones fáciles a partir de un diagnóstico limitado pero contundente (la “corrupción” en Hernández; la “seguridad” en Nayib Bukele), y que habilita canales de comunicación directa con los ciudadanos a través de las redes (como Donald Trump o nuevamente Bukele), próximas al “tecno-populismo” (Bickerton y Invernizzi, 2021) o al “ciber-populismo” (Bruzzono, 2022).

La segunda dimensión radica en el voto del descontento y de castigo a la política tradicional, que encarnan tanto Petro como Hernández. En la primera vuelta entre los dos sumaron un 68,45% de los votos, frente al 24% de la derecha y el 4% del centro. En Colombia se ha experimentado, pues, un desgaste de la capacidad de movilización y representación de la política tradicional, ligada tanto a la figura de Álvaro Uribe Vélez —y sus propuestas de “mano dura” para enderezar el país—, como a la de un centroderecha que logró el Acuerdo de Paz y el fin de las hostili-

dades con las FARC, pero que no logró consolidar una paz positiva para que el Estado ejerciese el monopolio de la fuerza y para impulsar las transformaciones sustantivas que necesita el país.

Ahora bien, a pesar del agotamiento del uribismo, las bases conceptuales de su discurso siguen vigentes. Adviértase que la estructura del voto en las dos vueltas de 2022 se asemeja a la de los resultados del plebiscito de 2016. Esto lleva a plantear como hipótesis que, aunque el descontento es general, su expresión está relacionada con la integración de las regiones al mercado y al Estado, y con la afectación por el conflicto armado. Allí donde el conflicto estuvo más arraigado y hay menor presencia estatal, tanto el apoyo al Acuerdo de Paz como a Gustavo Petro obtuvieron más votos. Allí donde hay una mayor integración al mercado, el “miedo a la izquierda” está más arraigado. El discurso del orden, de la mano dura, del personalismo, de que lo que el país necesita es alguien que venga y acabe con la “robadera”, sigue vivo.

Las fuentes del enfado ciudadano

La movilización social, que ya marcó el año 2019 y se revivió en 2021, no es nueva. Forma parte de un largo ciclo de protestas que han ido extendiéndose por todo el país y que ha ampliado su base de actores implicados, incrementado sus demandas hacia el gobierno nacional. Actualmente, un año después de las movilizaciones de abril de 2021, siete de cada diez colombianos creen que las marchas y el paro nacional de entonces estaban justificados, según la encuesta de opinión pública del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Asimismo,



mo, la evolución de la aprobación del presidente Duque refuerza la tesis de que el enfado ciudadano se mantiene vivo. En abril de 2021 desaprobaban su gestión el 76% de los colombianos, en marzo de 2022 lo hacían aún, como se ha indicado, el 73%, según la encuestadora Invamer (2022).

De hecho, Cepeda (2021) señala cómo el periodo 2011-2021 representa un ciclo de movilización social favorecido por cambios en el entorno, muy especialmente por el Acuerdo de Paz. Este proceso tuvo tres fases: en primer lugar, la del inicio de las negociaciones, que explicitó el reconocimiento del conflicto armado por parte del gobierno, y visibilizó asimismo otros conflictos sociales, llamando la atención sobre su necesaria gestión. En segundo lugar, la negociación permitió que otros sectores sociales percibieran al gobierno como más propenso a escuchar voces disidentes. Finalmente, el discurso de búsqueda de una salida negociada deslegitimó la respuesta represiva del Estado frente a actores políticos no armados.

El ciclo de movilización 2011-2021 ha tenido grandes hitos: paros de transportadores en 2011; movilizaciones campesinas en 2013; movilizaciones a favor de la paz de las organizaciones de la sociedad civil en 2016; movilizaciones estudiantiles en 2018 y 2019; marchas en defensa de los líderes sociales y la implementación del acuerdo en 2019, y el paro nacional en 2021 (Cepeda, 2021).

En esta larga maduración del descontento social cabe pues remontarse al periodo del expresidente Juan Manuel Santos, quien hizo frente a un gran paro nacional cam-

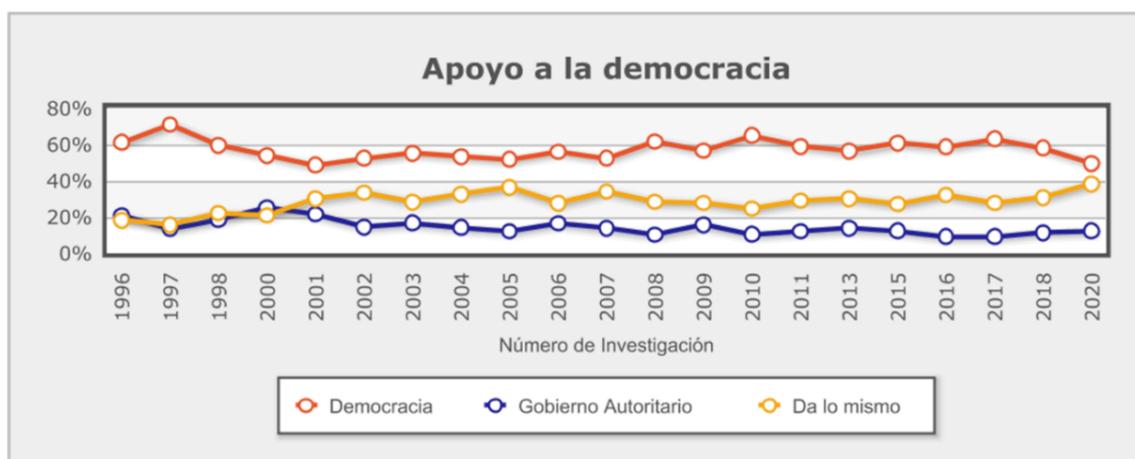
pesino que solventó de forma temporal, con promesas de inversión y apoyo que a la postre se revelaron insuficientes e ineficaces. A esta falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados, y de otros posteriores, se sumó más recientemente la difícil gestión de la pandemia y la incapacidad del presidente Duque de dar un cauce de diálogo a la tensión social. Ciertamente, el proceso de movilización estuvo brevemente en reposo a raíz de la pandemia de COVID-19; sin embargo, algunos eventos de brutalidad policial continuaron alimentando la tensión. Justamente, la respuesta estatal a la tensión social, militarizada y de choque frontal, fue uno de los elementos que contribuyó a expandir el descontento entre sectores que inicialmente no convergían con los motivos de las demandas sociales.

Así, la movilización social de 2021 fue más amplia y más transversal en términos de clases que nunca. Aunque la agenda de las demandas estaba particularizada por diversos colectivos, se pueden identificar algunos factores aglutinantes, como la percepción de incumplimiento del Acuerdo de Paz, y la citada respuesta represiva del gobierno ante las protestas, que dejó numerosos muertos y algunos casos simbólicos que fortalecieron la repulsa civil. Cabe destacar que, en Colombia, el recurso a la represión estatal violenta no es infrecuente (Rodrigues y Rodríguez Pinzón, 2020), pero sí lo es que la contestación ciudadana sea interclasista y tanto rural como urbana: ello denota una tensión social acumulada que durante años no ha encontrado respuesta ni capacidad de gestión del descontento por parte del gobierno.

La violencia ha sido siempre uno de los determinantes políticos en Colombia, quizá a causa de una tensión irresuelta entre los cauces democrático y de derecho, y las vías de hecho: los primeros nunca han terminado por imponerse sobre las segundas (Gutiérrez Sanín, 2014). El problema es que, en la actualidad, la presencia de la violencia estatal en sus diferentes formas en el país se aúna con el creciente cuestionamiento al sistema democrático latente en Occidente y al desgaste del contrato social en la región latinoamericana.

En este sentido, según los datos de Latinobarómetro, en 2020 se constataba un aumento del porcentaje de colombianos a los que les era indiferente un sistema autoritario o democrático, con la particularidad de que dicho aumento provenía enteramente de personas que antes preferían la democracia. A su vez, según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés), tan solo el 53% de la población prefiere una democracia y el 38% toleraría un golpe militar en casos de alta corrupción.

GRÁFICO 1. Apoyo a la democracia



Fuente: LAPOP, 2022

La corrupción como motor del enfado

Como se ha indicado, la corrupción es uno de los motores del desencanto ciudadano y fue el trampolín electoral de Rodolfo Hernández. En efecto, la corrupción es el primer problema para el 80,9% de los colombianos, seguida de lejos por la desigualdad y la pobreza (57,8%), y la inseguridad (57%) (Santaeulalia, 2022).

El problema de la corrupción está unido al de la impunidad por este tipo de delitos. Según el informe del Observatorio de

Justicia e Impunidad (2021) en el año 2020, durante la pandemia, los delitos de corrupción aumentaron un 68%, pasando de 432 casos en 2019 a 727 en 2020. Más aún, según el mismo informe, en 2020 se registró una reducción general en varios indicadores de judicialización de procesos penales por delitos contra la Administración pública y contra mecanismos de participación democrática, lo que supone una disminución de las legalizaciones de captura, preclusiones, aceptación de cargos y preacuerdos. Asimismo, se redujo la apli-

cación de principios de oportunidad y de sentencias condenatorias en procesos penales por delitos contra la Administración pública.

Los hallazgos señalan que la impunidad es muy alta en casos de servidores públicos. Así, en muchos casos de delitos contra mecanismos de participación democrática y contra la Administración pública se observa que, aunque el responsable es conocido, no debe ser encontrado o establecido, porque los tipos penales infringidos buscan proteger bienes jurídicos tales como la integridad de la Administración pública o la moralidad administrativa, determinándose la imposibilidad de encontrar o establecer al sujeto pasivo (Observatorio de Justicia e Impunidad, 2021).

Otra dimensión de la corrupción —de evidente relevancia política— es la de la compra de votos. En este caso, el informe de la Misión de la Unión Europea sobre las elecciones parlamentarias de marzo de 2022 concluyó que, aunque las elecciones contaron con suficientes garantías, se hallaron indicios de compra de votos (Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, 2022).

Estas evidencias confirman que las movilizaciones contra la corrupción están bien fundamentadas, y que sin duda supone uno de los principales desafíos del presidente electo. Petro no puede ignorar las razones del enfado ciudadano de los votantes de Hernández, compartidas igualmente por los votantes de la izquierda.

Pobreza, hambre, desigualdad y crecimiento económico

Colombia enfrenta una crisis social que puede agravarse por el estrés de la economía global. De hecho, la inflación está en niveles inéditos: en junio de 2022 alcanzaba el 9,7% y la acumulada de 2022 llega al 6,55%. Reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2022), muestran que los precios de los alimentos se han incrementado hasta un 26% en el último año, mientras el salario mínimo solamente ha aumentado un 10%, una diferencia que impacta profundamente en los hogares de ingresos bajos. Además, si se atiende a las cifras actuales (marzo de 2022), tan solo el 74% de la población consume tres comidas al día (DANE, 2022), mientras que en marzo de 2019 lo hacía el 93,4%.

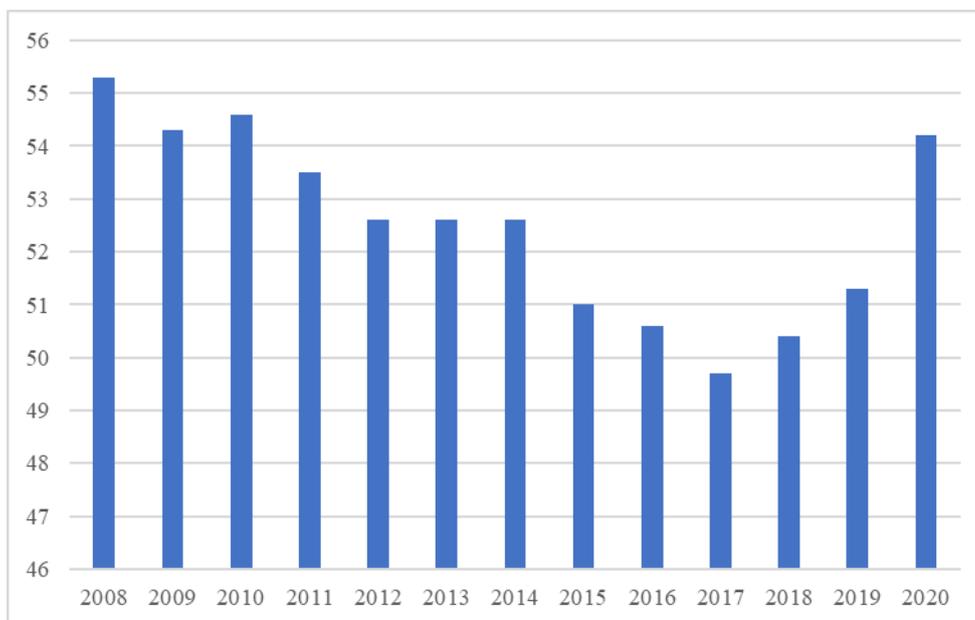
Ciertamente, la recuperación es positiva y se prevé que la economía crezca un 6,1% en 2022. No obstante, este crecimiento no será suficiente para superar los graves indicadores de pobreza que, tras la COVID-19, aún no se han revertido. En 2021 el índice de pobreza se ubicó en el 39,3%, y el de pobreza monetaria extrema llegó al 12,2%, superando cifras que no se veían desde 2012, cuando se empezó a monitorear anualmente (*El Espectador*, 2022).

En este punto, así como la corrupción fue el centro del discurso electoral de Hernández, la desigualdad fue el centro del discurso de Petro. Recuérdese que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, con un coeficiente de Gini de 0,539. Como puede observarse en el Gráfico 2, la evolución del índice mostraba un ligero descenso en la iniquidad,

relativamente estable entre 2008 y 2017. Pero la tendencia se ha revertido a partir

de entonces y ha escalado de forma vigorosa a raíz de la pandemia.

GRÁFICO 2. Evolución del Índice Gini, 2008-2020 (Colombia)



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.

Para afrontar la gravísima situación social que generaron la pandemia y las medidas de aislamiento social, el gobierno creó un sistema de transferencias, el “Ingreso Solidario” (IS), que sirvió para paliar de forma inmediata sus efectos más duros. El programa tuvo aciertos y fallos, pero sirvió como precedente para plantear la necesidad de una prestación de renta básica, iniciativa que se radicó como proyecto en el Senado en marzo de 2021. Una renta de este tipo, según el proyecto, tendría que cubrir a 7,46 millones de familias, una cantidad muy superior a la del IS, cuya meta son 4,1 millones de familias. Actualmente el IS asigna un monto variable a cada familia que cubre la brecha que existe entre el ingreso del hogar y la línea de pobreza, aunque el monto sigue siendo menor que el propuesto en el proyecto de

renta básica (Guanizo y Caicedo, 2021). Como señala Guanizo, hay evidencia sobre el bajo impacto de esta medida en la tasa de empleo, e incluso podría ser positivo y, de hecho, algunas estimaciones señalan que una transferencia de 36 dólares para el 55,6% de la población podría reducir al 3,2% la pobreza extrema y al 24,8% la pobreza moderada (Guanizo y Caicedo, 2021; Dávila y otros, 2021).

En la campaña electoral los dos candidatos señalaron su interés por crear esta renta, de modo que se ha convertido en uno de los puntos importantes que tendrá que abordar el nuevo gobierno en su política social y en uno de los ejes de la agenda política del país. Concretamente, Petro propuso la introducción de una renta básica y de una pensión universal, así como la



creación de un sistema nacional del cuidado. Estas medidas podrían tener un impacto muy relevante en la superación de la pobreza y, sobre todo, en la disminución de la vulnerabilidad de mujeres, niños y niñas y adultos mayores.

La creación de estos sistemas de transferencias y protección implican un esfuerzo fiscal relevante, pero con posibilidades seguras de retorno de la inversión en el mediano y largo plazo. El desafío es dotar a estos sistemas de mecanismos de gestión eficaces y transparentes, para lo que el país cuenta con instituciones de focalización potentes, como el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), que saldrá fortalecido si se elimina el sistema de estratificación socioeconómica.

Por otro lado, es indispensable garantizar su sostenibilidad financiera. El gobierno de Petro va a enfrentar un ciclo global lleno de incertidumbres, en el que numerosos organismos apuntan la posibilidad de que se produzca una estancación o incluso una recesión mundial (Banco Mundial, 2022a). La salud de la economía nacional depende de muchos factores, algunos a la mano del presidente y otros no; sin embargo, se encuentra ante la responsabilidad de reducir la pobreza no solo a través del gasto, sino con un crecimiento justo. Esto supone mejorar la balanza fiscal, el sistema laboral, aumentar la formalidad y generar incentivos para la inversión.

En este plano económico, uno de los mayores desafíos para Colombia estriba en la deuda fiscal, que a cierre de 2021 se ubicó en los 70 billones de pesos, el 7,1% del

PIB, con un salto significativo por la crisis sanitaria. Ya en 2021 el presidente Duque intentó llevar adelante una reforma fiscal que se convirtió en el detonante de las protestas masivas. El malestar no ha remitido, pero la reforma es impostergable.

A lo largo de su campaña Petro sostuvo la necesidad de impulsar la reforma fiscal, centrada en un aumento de la recaudación sobre las 4.000 mayores fortunas de Colombia y en una reducción de exenciones con las que espera recaudar 50 billones de pesos. Sin embargo, es muy probable que el país necesite muchos más cambios, generando un reto que puede tensionar su relación con las clases medias.

La elección del candidato de izquierda también supone un desafío ante los sectores productivos y financieros del país. El viaje a la moderación de Petro en su campaña no ha sido suficiente para desmontar los años de miedo al cambio, en un país cuya estabilidad macroeconómica ha servido de falaz bálsamo para la desigualdad. Crecimiento e igualdad no pueden seguir siendo conceptos reñidos, sino que tienen que operar en el mismo sentido.

Otro punto importante es la insistencia del nuevo presidente en cambiar la matriz productiva del país reduciendo la dependencia de los recursos no renovables. Se trata de una agenda en la que coincide con otros gobiernos de izquierda de la región y que debería servir de enganche con una Unión Europea que contempla este mismo proceso como parte de su apuesta de transformación socioeconómica y de su soberanía estratégica. El proceso tomará tiempo e implica grandes retos económi-

cos, por lo cual es de esperar que, más que materializarse en este periodo presidencial, se sienten las bases políticas y legales que permitan encausarlo. Las reticencias de algunos sectores productivos serán profundas y lidiar con ellas supone poner sobre la mesa la representación de los votos de las comunidades que han presionado para que esta agenda verde se haga real.

En definitiva, el presidente necesita aunar voluntades dispares para enfrentar las reformas pendientes, mientras el entorno económico internacional se torna azaroso. Hará falta mano izquierda, pero también apelar a una apuesta de largo plazo que convenza a empresarios e industriales de que su enemigo es la inestabilidad social, y que la única forma de paliarla es disminuir la desigualdad que la nutre. Los mensajes que se han dado con la constitución del gabinete de gobierno y durante el proceso de transición del poder son claves para apaciguar las pulsiones extremistas de los mercados y crear un clima de confianza que favorezca el diálogo.

Guerra, paz y seguridad

En los primeros seis meses de 2022 en Colombia fueron asesinados 89 líderes y defensores de derechos humanos, y 21 firmantes del Acuerdo de Paz (Indepaz, 2022). Asimismo, se han cometido 44 masacres que han dejado 158 víctimas. La violencia terrorista también ha estado presente, con más de una veintena de atentados terroristas. Así, aunque el Acuerdo de Paz ha tenido un importante impacto en la evolución sociopolítica del país, la paz sigue estando muy lejos.

La salida de la guerrilla de las FARC de los territorios no supuso la llegada efectiva del control militar ni del Estado, sino que produjo un vaciamiento que ha sido ocupado por otros grupos armados, con el agravante de la fragmentación de los poderes locales y de los actores armados, y un aumento del riesgo de disputa y de la vulnerabilidad de los civiles (Gutiérrez Sanín, 2020). Además, hay una desconexión explícita entre la seguridad y la implementación de la paz a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que pone en riesgo el enfoque de paz territorial en el que se basa el acuerdo.

El gobierno de Duque jugó al equilibrio intentando implementar el Acuerdo de Paz sin creer en él, lo que condujo a desencuentros entre el gobierno y sus copartidarios frente a las instituciones encargadas de la justicia para la paz. Han escaseado los recursos y la voluntad para el cumplimiento de algunos puntos, lo que supone una implementación desequilibrada: más eficaz en la reincorporación de excombatientes; resiliente, a pesar de las dificultades, en la dimensión de justicia y paz; y muy retrasada en los puntos que corresponden a la reforma agraria integral y al problema de las drogas ilícitas (Rodríguez Pinzón, 2022).

La débil implementación del acuerdo redonda en el descontento social en las regiones más afectadas por la guerra, algo sin duda relacionado con el resultado electoral del Pacto Histórico. Según la encuesta “Escuchar la Paz”, dirigida en 2021 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Peace Research Institute Oslo (PRIO), aunque el



88% de las personas que habitan los territorios en los que se aplican los PDET valoran positivamente los componentes asociados al Acuerdo de Paz, en ningún caso más del 26% considera que su implementación es satisfactoria, y solo el 25% considera que el país avanza hacia la reconciliación (Sánchez Meertens y otros, 2021).

La necesidad de implementar el Acuerdo de Paz es un tema en el que coincidían los dos candidatos, pero no basta con voluntad. Falta liderazgo y capacidad de articular diversas agendas, especialmente las de transformación productiva del país, de integración territorial y de seguridad, además de mantener el apoyo internacional. El nombramiento como canciller de Álvaro Leyva, un político con gran experiencia y consagrado a las gestiones de paz, permiten augurar una diplomacia que va a rescatar esta agenda de paz, aunque ahora enmarcada en la nueva agenda ambiental y social, distante de las locomotoras del progreso que en su día promovió Juan Manuel Santos.

En la agenda de seguridad es donde se encuentran los mayores desafíos. Resulta relevante preguntarse sobre la estrategia del nuevo gobierno de cara al Ejército. La elección del candidato de izquierda supone una prueba para las Fuerzas Armadas: estas son poderosas, el gasto militar en Colombia es el más alto de la región, un 3,4% del PIB y el 9,5% del gasto general del gobierno; unas cifras que se han mantenido en los últimos 30 años (Banco Mundial, 2022b).

Las audiencias de miembros de las Fuerzas Armadas sobre los casos de falsos

positivos en el marco de la Justicia Especial para la Paz (JEP), dejaron terribles relatos de unidades del Ejército que mataron e hicieron pasar por muertas en combate a personas inocentes (Ronderos, 2022). Se trata de hechos muy vivos en las comunidades de las zonas marginales de las ciudades y en las regiones en las que Petro obtuvo sus mejores resultados. Además, no se reducen al pasado: actos como la operación de las Fuerzas Armadas en Alto Remanso Putumayo, de marzo de 2022, en la que murieron 11 civiles, muestran la vigencia del terror como estrategia militar (Ordoñez, 2022) y la criminalización de los civiles en la persistente guerra contra las drogas.

Más allá de las desconfianzas mutuas, el Ejército necesita una estrategia para enfrentar a los grupos armados ilegales y para superar la nefasta imagen que sus desmanes han dejado en una parte de la población que ahora, a través de las urnas, reclama su papel en la política. Esta fuerza pública requiere con urgencia que el presidente establezca un poder civil que tome el mando de veras: que trace el norte con una misión para la posguerra contra-insurgente, torne transparentes sus cuentas y establezca controles estrictos a la corrupción interna (Ronderos, 2022), sin afectar la efectividad y la cadena de mando.

Otra de las reformas pendientes, incluida en las propuestas de Petro, es la de la Policía. Los mencionados desmanes en el marco de la “militarización” ante las movilizaciones sociales, así como durante la pandemia, han revivido una cuestión que se reactiva cada vez que hay conflictos, y que evidencia la disfuncionalidad de la

institución (Gil Pinzón y Niño Guarnizo, 2022).

Como señalan Gil y Niño (2022) desde hace más de 20 años se reproducen diagnósticos, discusiones, recomendaciones, reformas y contrarreformas para abordar cuestiones críticas de la institución, como: su control interno; la transparencia e independencia de las investigaciones en casos de violencia o corrupción; la formación profesional, la capacitación, el formato y la organización de la carrera policial; o la priorización de labores dentro de la organización. Todas estas cuestiones continúan vigentes. Sin embargo, la Policía se resiste al cambio y asume como una amenaza los intentos de que otras instituciones la controlen. Además, hay una serie de anclajes contextuales (mercados de drogas, grupos armados ilegales) que sirven para justificar dicha resistencia. Igualmente, el hecho de que la demanda social de su transformación sea cíclica tiende a desincentivar y castigar a los políticos que intentan promover cambios (Gil Pinzón y Niño Guarnizo, 2022). No obstante, en el caso de Petro parece un compromiso ineludible con sus votantes.

El primer paso habría de consistir en mudar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al de Interior, adecuándola así a la estructura que prevalece en la mayoría de los países. Sin embargo, el nuevo presidente ha manifestado su intención de trasladarla a un nuevo Ministerio de Seguridad y Paz, sin que esté claro si este asumirá las funciones de Interior. Tras ello, será necesario mejorar la independencia de sus sistemas de vigilancia; promover su desmilitarización y la interiorización del enfoque de derechos

humanos; velar por la salud mental y bienestar de sus miembros; revisar la asignación de funciones; reforzar sus lazos con la ciudadanía, y también fortalecer la labor de veeduría ciudadana de la sociedad civil organizada (Gil Pinzón y Niño Guarnizo, 2022). La temprana designación de un general retirado para la labor de empalme permite intuir que será uno de los primeros asuntos en los que se centre el nuevo presidente.

Finalmente, no puede dejar de mencionarse el cambio a acometer en la política de drogas, que los dos candidatos presidenciales incluían en sus propuestas. Se trata de un asunto crucial, cuya reforma ha sido largamente discutida, que además requiere de apoyo internacional, pero que nunca ha tenido un verdadero respaldo político.

Cabe recordar que, aunque en el Acuerdo de Paz la única opción pasa por la erradicación manual voluntaria, el gobierno de Duque insistió en una vuelta a la fumigación forzada de los cultivos para contener el número de hectáreas de coca, tensando así la relación con los cultivadores. Ante ellos, además, no se ha cumplido de forma adecuada lo estipulado en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), derivado del Acuerdo de Paz.

La erradicación forzada y, más aún, la aspersión de glifosato, son estrategias que generan un enorme rechazo popular (Sánchez Meertens y otros, 2021) y que no se han mostrado efectivas a largo plazo. Sin embargo, el problema no consiste solo en las limitaciones de estas formas de contención ni en sus malos resultados. El problema de la guerra contra el narco-

tráfico está implícito en la propia medida de su éxito: la cantidad de hectáreas cultivadas no permite abordar la complejidad del fenómeno, los distintos eslabones que lo componen y la forma diferenciada en la que estos responden a los cambios en la oferta, la demanda y los sistemas de control. Colombia no está presa del narcotráfico, sino de una guerra que no puede ganar tal como está planteada (Rodríguez Pinzón, 2022).

A su vez, debido a su vulnerabilidad y exclusión, la población incluida en los PNIS ha sido una de las más afectadas por la pandemia y, previsiblemente, va a sufrir con mayor intensidad las consecuencias del aumento de carburantes, fertilizantes y alimentos. Por lo demás, la desconfianza sobre el cumplimiento de los acuerdos genera una situación grave, porque no solo puede dotar de espacio a los actores armados, sino que mina las opciones de acción institucional en estas zonas. El gobierno de Petro abre una puerta para reconstruir las relaciones con los cultivadores, pero ello requiere de políticas que verdaderamente atiendan su integración en el mercado legal, de construcción de confianza, además de capacidad para gestionar el proceso con Estados Unidos, limitando su presión con resultados.

Finalmente es indispensable señalar en este punto el desafío ambiental. En lugar de garantizar una mejora en la conservación medioambiental, la legislación de protección ambiental contra la deforestación ha derivado, según la evidencia, en la criminalización de campesinos (De Justicia, 2021). Además, el presidente tendrá que hacer frente a una dramática realidad: Colombia es uno de los ocho

países del mundo con mayor responsabilidad en la pérdida global de biodiversidad y sus problemas de desigualdad e inseguridad están fuertemente relacionados con esta situación.

Democracia, instituciones y política para un cambio histórico

El resultado de las elecciones presidenciales en Colombia supone la consolidación del proceso de transformación iniciado con el proceso de paz y que ha fructificado bajo una amplia participación electoral, la extensión de los espacios políticos y el desarrollo del ejercicio de la ciudadanía. La paz ha cambiado a Colombia.

Este cambio, fortalece las instituciones y, de cara al futuro, clama por impulsar un diálogo que logre acuerdos nacionales en los asuntos más urgentes. Como en otras ocasiones, las instituciones colombianas han dado muestras de solvencia y rigor, lo cual garantiza la fiscalización institucional del poder ejecutivo, aun a pesar de la pérdida de independencia de muchos organismos de control durante el periodo del presidente Duque. Cabe prever que, en la actual coyuntura política, haya menos incentivos para que esto se repita. Por lo demás, aunque se habían sembrado dudas sobre la transparencia del proceso electoral, estas han quedado superadas y cerradas. La Misión de la Unión Europea ha publicado su informe respaldando la transparencia del proceso e incluso el candidato vencido ha llamado a respetar y no cuestionar el resultado. Asimismo, el proceso de empalme entre los gobiernos ha hecho gala de respeto a las instituciones y a la voluntad del pueblo.

Además, la llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia es una gran noticia en términos de representatividad del pueblo afrocolombiano y raizal, aunque, a su vez, supondrá un gran desafío para el presidente y el ejecutivo: habrán de apoyar la labor de Márquez frente a las embestidas racistas y clasistas que va a sufrir su gestión.

En el plano político, como se ha indicado, se abre la oportunidad para construir acuerdos de Estado con los que llevar a cabo reformas que, en el medio y largo plazo, beneficien a todos. Esto es viable si se dan dos condiciones: la primera reside en que la oposición no se dedique a bloquear al gobierno para hundir sus proyectos. Esta opción resultaría desastrosa: significaría paralizar las reformas en un país necesitado de cambios, aumentar la tensión social y acabar con las herramientas para transitar las difíciles condiciones globales que vienen. Los primeros movimientos muestran una tendencia a la aglutinación alrededor de la propuesta de cambio del nuevo presidente. Un partido Liberal dividido ha asegurado que le apoyará en el Congreso, y el partido Conservador, señala que “no le hará oposición”; unos movimientos que aún requieren de tiempo para observar cómo se concretan y hasta qué punto los partidos tradicionales están dispuestos a enfrentarse a sus inconsistencias.

Los políticos tradicionales saben que la sociedad está enfadada y que necesitan cambiar. Un reportaje en *La Silla Vacía* (2022) recogía los apesadumbrados testimonios de barones electorales que veían temblar los cimientos de su poder. Para llegar al poder, el Pacto Histórico consi-

guió negociar con sectores de la política tradicional que le dieron su respaldo, pero estos sectores no están necesariamente asimilados al cambio. Se están produciendo movimientos en las dinámicas del poder local, que ya no se centra solo en el mantenimiento del *statu quo*, sino que aspira a gestionar la representación social; las fuerzas políticas saben que esto se valorará en el futuro. Al no contar con la mayoría del Congreso, el poder local será la baza de Petro para que sus proyectos consigan respaldo. Esta estrategia puede verse fortalecida por la falta de un líder de la oposición, dado que es poco probable que Rodolfo Hernández asuma ese rol. Es probable que esto también signifique el fortalecimiento de opciones extremistas dentro de la derecha, que ya va reclutando miembros y que apunta a liderazgos más claros como el de María Fernanda Cabal.

La segunda condición tiene que ver con la estabilidad del ejecutivo, lo cual apela directamente a que el presidente Petro sepa corregir los defectos, en gestión de equipos, que tantas dificultades le generaron en la Alcaldía de Bogotá. Asimismo, tendrá que lidiar con la continua tensión entre una línea radical, que no le permita separarse de la literalidad de su programa, y otra de cesión, para conseguir acuerdos que viabilicen cambios. Tal como sugería Mejía Vergnaud (2022): si Petro opta por la acción radical se arriesga a terminar su gobierno sin conseguir logros, pero con una imagen de fidelidad a su causa y la admiración de la izquierda más ideológica, local y global. El respaldo de la calle sería vital, trasladando el peso de la culpa al “*establishment*”.

En la segunda opción, si se abre a la búsqueda de acuerdos —lo que en inglés se denomina “*compromise*”—, podría perder reputación y sufrir críticas de sus copartidarios y militantes. Sin embargo, al conseguir victorias políticas no solo conseguiría reputación de eficacia, sino que, y quizás más importante, podría convertir a la izquierda en una fuerza central, desterrando el miedo irracional, a la vez que “podría instalar en diferentes sectores del gobierno a funcionarios cercanos a la izquierda que en adelante constituirán una base firme para el proyecto” (Mejía Vergnaud, 2022).

No está de más señalar que, en la deliberación y negociación, las propuestas del gobierno pueden perder radicalidad, pero ganar viabilidad y calidad. El nuevo presidente hará bien en reconocer (al menos en su fuero interno) que, en contra de su argumento de campaña, en Colombia sí ha habido gobiernos democráticos y que el país ha avanzado en algunas sendas cuyas fortalezas serán las bases de su política social.

El reto de Petro no es fácil: tendrá que ser capaz de enfrentarse a sí mismo, a sus debilidades, a las altas expectativas de sus votantes, al miedo de una parte de la sociedad y el férreo bloqueo por la derecha más radical. Hasta ahora los primeros pasos antes de la posesión plantean un escenario de búsqueda de acuerdos amplios, con un buen nivel de acogida, incluso por parte del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, la apertura de la

agenda política, que incluso llevó a que en los programas de Hernández y de Petro hubiera relevantes puntos en común, supone que en este caso la responsabilidad del cambio no depende solo del presidente.

Los diferentes sectores sociales tienen que asumir un cambio que permita mejorar la igualdad; la política tradicional debe acomodarse a la nueva agenda, a la participación amplia y a la veeduría ciudadana; y los sectores productivos tendrán que actuar concertando sus intereses individuales con una estabilidad social que viabilice sus objetivos. La ciudadanía tiene el reto de superar las divisiones horizontales y asumir el precio de un sistema de solidaridad social que apunte la victoria sobre la desigualdad.

Finalmente hay otros desafíos emergentes: la apertura a retomar los diálogos de paz por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), paralizados por sus acciones terroristas; el giro regional que puede proporcionar al presidente colombiano una plataforma para el liderazgo suramericano; la gestión de la presencia China como actor de desarrollo; y los desafíos ambientales y sanitarios que, tras lo ocurrido en 2020, no son cosa de ciencia ficción.

Conclusiones

- Colombia vive un ciclo de cambios que se inició con la negociación y posterior firma del Acuerdo de Paz definitivo con la guerrilla de las FARC. Este ciclo ha permitido una ampliación de la agenda pública, incluyendo problemas estructurales que habían sido invisibilizados por el efecto de la guerra. Asimismo, se ha producido un largo ciclo de movilización social, canalizado en el resultado electoral, que ha castigado la política tradicional y buscado opciones de cambio que varían siguiendo criterios regionales de inclusión al mercado y afectación por el conflicto armado, entre otros.
- El descontento ciudadano es un castigo a un modelo político que se quedó sin soluciones para los grandes desafíos del país. Sin embargo, en un país marcado por el histórico miedo a la izquierda democrática, este castigo se produce en un marco de profunda polarización. El resultado electoral de Petro es fruto de una extraordinaria capacidad de movilización que combina áreas urbanas como Bogotá, la costa atlántica y su estructura de captación política, y la costa pacífica históricamente excluida de los procesos de representación política.
- La gran ganadora de este proceso ha sido la democracia colombiana. Superados los temores de fraude, las instituciones han mostrado fortaleza, y el reconocimiento del resultado por parte del gobierno y del contendor, y la disposición de diferentes sectores por abrir un diálogo amplio han sido impecables. La invitación del nuevo presidente al diálogo supone un compromiso con el coste de conseguir grandes acuerdos políticos sobre un programa fuertemente anclado a una propuesta de cambios de largo plazo. Sin embargo, también ha de superar tentaciones de adanismo político aprovechando las fortalezas políticas e institucionales que se han construido en el país.
- La dinámica de aumento de la participación electoral refuerza y legitima la necesidad y apoyo de una política basada en la representación de las demandas sociales y no en la defensa del *statu quo*. Esto respalda, además, la adhesión de Colombia a una nueva agenda latinoamericana en la que el medio ambiente y la política social tienen un rol central. Asimismo, la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez asegura un lugar importante al feminismo.
- La responsabilidad de conseguir el cambio y desterrar el miedo a la alternancia política no son solo responsabilidad del nuevo gobierno. Resulta indispensable el concurso del sector privado y de los diferentes sectores políticos concentrados ahora en buscar su acomodo en el nuevo escenario. Asimismo, es necesario conseguir el apoyo y compromiso de una ciudadanía que valore la superación de la desigualdad y de la pobreza como el mayor bien común.

Referencias bibliográficas

- BANCO MUNDIAL (2022a): “Perspectivas económicas globales”, Washington D.C.
- (2022b): *Base de datos*, Washington D.C.
- BICKERTON, C. J., y INVERNIZZI, C.: (2021): *Technopopulism, the new logic of democratic politics*, Nueva York, Oxford University Press.
- BRUZZONO, A. (2022): *Ciberpopulismo: política e democracia no mundo digital*. Contexto ,
- CEPEDA, C. (2021): “Protesta y Movilización social en Colombia”, *Tiempo de Paz*, n° 143, MPDL, invierno, pp. 79-87.
- DANE (2022): *Encuesta Pulso Social*, marzo de 2022. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-marzo-2022.pdf>.
- DÁVILA, M.^a X., RODRÍGUEZ, A., LEON, D. y CHAPARRO, N. (2021): “Renta básica con enfoque feminista: De la utopía a la Necesidad Urgente”, *Dejusticia*.
- EL ESPECTADOR (2022): “Las reformas económicas que debe enfrentar el próximo gobierno”, *El Espectador*, 21 de mayo.
- EL PAÍS (2022): “Colombia refuerza su seguridad tras varios días de violencia por el paro armado”, *El País*, 9 de mayo.
- GALINDO, J. (2022): “Dé donde salieron los 2,7 millones de nuevos votos de Gustavo Petro”, *El País*, 21 de junio.
- GIL PINZÓN, C. y NIÑO GUARNIZO, C. (2022): “Reforma Policial en Colombia: urgente y pendiente desde hace tres décadas”, *Tiempo de Paz*, n° 143, MPDL, invierno, pp. 98-111.
- GUANIZO, D. y CAICEDO, S. (2021): “El ingreso solidario en Colombia: un análisis en perspectiva de derechos”, *Tiempo de Paz*, n° 143, MPDL, invierno, pp. 72-81.
- GUTIÉRREZ SANÍN, F. (2014): *El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)*, Bogotá, Debate-IEPRI.
- (2020): *Un Nuevo Ciclo de Guerra en Colombia*, Bogotá, Debate.
- (2022): “Miedos y volcanes”, *El Espectador*, 27 de mayo.
- INDEPAZ (2022): *Líderes sociales, defensores de DDHH y firmantes de acuerdo asesinados en 2022*. 20 de junio. Disponible en: <https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados->



- en-2022/ (consultado el 22 de junio de 2022).
- INVAMER (2022): *Poll - Medición #148*, marzo de 2022.
- LA SILLA VACÍA (2022): “O cambiamos o nos morimos’: políticos tradicionales sobre su debacle”, 5 de junio.
- MEJÍA VERGNAUD, A. (2022): “El dilema del presidente Petro”, *Descartes en bata*, 2 de abril. Disponible en: <https://www.descartesenbata.com/home/2022/4/6/el-dilema-del-presidente-petro>
- MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA (2022): *Informe de misión de verificación de las elecciones legislativas 2022*.
- OBSERVATORIO DE JUSTICIA E IMPUNIDAD (2021): *Primer Informe de Hallazgos*, Instituto Anticorrupción, National Endowment for Democracy.
- OCDE (2022): *Colombia: Perspectivas económicas junio*, París.
- ORDOÑEZ, L. (2022): “La Masacre de Alto Remanso: El terror como estrategia militar”, *Razón Pública*, abril.
- PALOMINO, S. (2022): “La élite política conservadora celebra una fiesta en medio del paro armado en Colombia”, *El País*, 10 de mayo.
- RODRIGUES, T. y RODRIGUEZ PINZÓN, É. (2020): “Mano dura y democracia en America Latina: Seguridad pública, violencia y Estado de Derecho”, *America Latina Hoy*, n° 84.
- RODRÍGUEZ PINZÓN, É. (2021): “Colombia en su laberinto”, *Política Exterior*, mayo. Disponible en: <https://www.politicaexterior.com/colombia-en-su-laberinto-2/>
- (2020): “Colombia 2020: La movilización social como oportunidad y reflejo del cambio”, *Análisis Carolina*, n° 1/2020, Madrid, Fundacion Carolina.
- (2022): “Atrapados en la inseguridad y la pobreza”, *Revista de Política Exterior*, n° 207.
- RONDEROS, M.^a T. (2022): “El necesario rescate civil de la institución militar”, *El Espectador*, 9 de mayo.
- SÁNCHEZ MEERTENS, C., WEINTRAUB, M.L., BINNINGSBØ, H.M., RODRÍGUEZ PINZÓN, É., PINTO, M.^a E. y RETTBERG, A. (2021): “Escuchar la Paz: Dimensiones y variaciones en la implementación del Acuerdo de Paz”, PNUD Colombia, PRIO, Universidad de los Andes.
- SANTAEULALIA, I. (2022): “La corrupción, el agujero negro de Colombia”, *El País*, 9 de mayo.



VASSET, Y. y GUAVIDA, L. V. (2019):
Radiografía del desencanto: La participación electoral en Colombia, Bogotá, Universidad del Rosario.

Fundación Carolina, junio 2022

Fundación Carolina
Plaza del Marqués de Salamanca nº 8
4ª planta, 28006 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
[@Red_Carolina](#)

https://doi.org/10.33960/AC_12.2022

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NonComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)